

0207-PE-03

(P.E.-207/03)

Buenos Aires, 3 de julio de 2003.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, a efectos de elevar a su consideración un proyecto de ley mediante el cual se propicia la adopción de normas ordenatorias del proceso de renegociación de contratos de obras y servicios públicos.

Dicha situación se enmarca en la grave crisis por la que atraviesa nuestro país, consecuencia de la cual el Honorable Congreso de la Nación sancionó la ley 25.561 por la que se declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria.

Por dicha norma se dispuso además que, en los contratos celebrados por la administración pública bajo normas de derecho público, comprendidos entre ellos los de obras y servicios públicos, quedasen sin efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio. Los precios y tarifas resultantes de dichas cláusulas, quedarán establecidos en pesos a la relación de cambio un peso (\$ 1) = un dólar estadounidense (u\$s 1).

Asimismo, por el artículo 9º de la citada ley se autorizó al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos comprendidos en las disposiciones del artículo 8º de la citada norma, debiendo tenerse en consideración, en aquellos que tengan por objeto la prestación de servicios públicos, los siguientes criterios:

1. El impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos.
2. La calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente.
3. El interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios.
4. La seguridad de los sistemas comprendidos; y
5. La rentabilidad de las empresas.

En el marco de tal delegación, el Poder Ejecutivo nacional ha dispuesto un conjunto de normas orientadas a materializar la renegociación de los contratos de concesión y licencia de los servicios públicos, entre las que se inscribe el decreto 293 del 12 de febrero de 2002, por el que se encomendó al ex Ministerio de Economía el desarrollo del proceso de renegociación, a cuyo fin se lo facultó para dictar las normas complementarias y reglamentarias, y a impulsar los procedimientos e instancias concernientes al desarrollo del referido proceso.

Es menester poner de relieve que en los acuerdos a celebrarse entre el Estado nacional y las empresas concesionarias, corresponde contemplar la necesaria compatibilización de las expectativas, intereses y derechos de los consumidores y de las empresas, lo cual requiere desarrollar un conjunto de instancias y procedimientos tales que resulten adecuados y suficientes para alcanzar el objetivo trazado.

En tal sentido, cabe señalar que el proceso de renegociación puesto en marcha a instancia legislativa, desconoce antecedentes similares dado que involucra al grueso del conjunto de servicios públicos que operan bajo gestión privada a partir del proceso de privatizaciones producido en la década del 90. La magnitud y la complejidad de la labor encarada por el Poder Ejecutivo nacional explican los numerosos factores y circunstancias que de distinta forma han dificultado el avance del proceso de negociación e impedido su conclusión.

Por dicho motivo, el plazo originalmente previsto por el gobierno nacional por el decreto 293/02 para concluir dicho proceso fue ampliado oportunamente por el decreto 1.839 del 16 de septiembre de 2002 y luego por la resolución del ex Ministerio de Economía 62 del 31 de enero de 2003.

Que por decreto 311 de fecha 3 de julio de 2003, se dispuso encomendar la discusión de los contratos a una unidad de renegociación y análisis de contratos de servicios públicos creada en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Ante tal circunstancia, se considera necesario, atendiendo a los objetivos fijados por la ley 25.561, ampliar el plazo dentro del cual el Poder Ejecutivo nacional se halla en uso de facultades extraordinarias para desarrollar la labor de renegociación encomendada, extendiéndolo hasta el 31 de diciembre de 2004.

Las previsiones del presente proyecto de ley se encuadran en la imposterizable función que recae sobre el Poder Ejecutivo nacional de resguardar los derechos de los usuarios y la continuidad de los servicios públicos, previniéndose que la celebración de los acuerdos de renegociación con las empresas concesionarias y licenciatarias de los servicios, deberá hallarse precedida por una instancia de audiencia y consulta públicas.

Asimismo, y a efectos de posibilitar el adecuado avance del proceso de renegociación, se estima conveniente aclarar la participación que puedan tener los entes reguladores en materia de revisiones contractuales durante el período de emergencia.

Atendiendo a los propósitos que en materia del proceso de renegociación establece la ley 25.561, se precisa el procedimiento a seguir para la aprobación de los acuerdos a celebrarse con las empresas concesionarias o

licenciatarias, se prevén sus alcances, se determina el supuesto de enmiendas transitorias, así como también, el curso a seguir una vez cumplida la instancia de renegociación, contemplando la intervención del Honorable Congreso de la Nación conforme al artículo 20 de la citada norma.

Debe destacarse que las previsiones del proyecto de ley que se acompaña, no autorizan en ningún caso, a las empresas contratistas o prestadoras de servicios públicos, a suspender o alterar el cumplimiento de sus actuales obligaciones.

A mérito de lo expuesto, las disposiciones que se ponen a consideración del Honorable Congreso de la Nación a través de presente proyecto de ley, se hayan orientadas a posibilitar el adecuado y cabal cumplimiento del mandato que fuera otorgado al Poder Ejecutivo nacional a través de la ley 25.561.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 313

Néstor C. Kirchner.

Alberto A. Fernández. – Roberto Lavagna. – Julio M. De Vido.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Dispónese la extensión hasta el 31 de diciembre de 2004 del plazo para llevar a cabo la renegociación de los contratos de obras y servicios públicos dispuesto por el artículo 9º de la ley 25.561. Dicha renegociación podrá abarcar a determinados sectores de servicios públicos o a determinadas contrataciones en particular.

Art. 2º – Las decisiones que adopte el Poder Ejecutivo nacional en el desarrollo del proceso de renegociación no se hallarán limitadas o condicionadas por las estipulaciones contenidas en los marcos regulatorios que rigen los contratos de concesión o licencias de los respectivos servicios públicos.

Las facultades de los entes reguladores en materia de revisiones contractuales, ajustes y adecuaciones tarifarias previstas en los marcos regulatorios respectivos, podrán ejercerse en tanto resulten compatibles con el desarrollo del proceso de renegociación que lleve a cabo el Poder Ejecutivo nacional en virtud de lo dispuesto por el artículo 9º de la ley 25.561.

Art. 3º – Los acuerdos de renegociación podrán abarcar aspectos parciales de los contratos de concesión o licencias, contemplar fórmulas de adecuación contractual o enmiendas transitorias del contrato, incluir la posibilidad de revisiones periódicas pautadas así como establecer la adecuación de los parámetros de calidad de los servicios.

En caso de enmiendas transitorias, las mismas deberán ser tenidas en consideración dentro de los términos de los acuerdos definitivos a que se arribe con las empresas concesionarias o licenciatarias.

Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional remitirá las propuestas de los acuerdos de renegociación al Honorable Congreso de la Nación, en cumplimiento de la intervención de la Comisión Bicameral de Seguimiento prevista por artículo 20 de la ley 25.561.

Corresponderá al Honorable Congreso de la Nación expedirse dentro del plazo de sesenta (60) días corridos de recepcionada la propuesta. Cumplido dicho plazo sin que se haya expedido, se tendrá por aprobada la misma. En el supuesto de rechazo de la propuesta, el Poder Ejecutivo nacional deberá reanudar el proceso de renegociación del contrato respectivo.

Art. 5º – Las disposiciones de la presente ley en ningún caso autorizarán a las empresas contratistas o prestadoras de servicios públicos, a suspender o alterar el cumplimiento de sus obligaciones.

Art. 6º – La presente ley es de orden público.

Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

Néstor C. Kirchner.

Alberto A. Fernández. – Roberto Lavagna. – Julio M. De Vido.

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

II DIPUTADOS